



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 29/10/2020

Radicado	08001-33-33-014-2019-00299-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	Luis Carlos Vivero Salcedo
Demandado	Municipio de Santo Tomás
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor Juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, informándole sobre la solicitud de medida cautelar elevada por el ejecutante.

PASA AL DESPACHO
Para decidir sobre solicitud de medida cautelar.

CONSTANCIA
Memorial por medio del cual se solicita medida cautelar radicado al correo electrónico de la oficina de servicios de los Juzgados Administrativos.

Alberto Luis Oyaga Larios
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020)

Radicado	08001-33-33-014-2019-00299-00
Medio de control o Acción	Ejecutivo
Demandante	Luis Carlos Vivero Salcedo
Demandado	Municipio de Santo Tomás
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

Visto el informe secretarial que antecede, y revisado el expediente efectivamente observa el Despacho memorial radicado de fecha 18 de agosto de 2020 por medio del cual el apoderado de la parte actora, solicita:

“Solicito se decrete el embargo y retención de las sumas de dinero que el municipio de Santo Tomás (Atlántico), posea a cualquier título o denominación bajo el NIT 800116284-6, cuentas corrientes, ahorros, C.D.T., certificados de depósitos financieros exigibles que posteriormente se lleguen a liquidar en cualquier banco, o a cualquier otro título, librando los correspondientes oficios a los siguientes **Bancos**:

AGRARIO
POPULAR
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
AV VILLAS
BBVA
BOGOTÁ
PICHINCHA
COLPATRIA
CAJA SOCIAL
OCCIDENTE
FALABELLA
CITIBANK
CORPBANCA
MUNDO MUJER

En consecuencia se libren los correspondientes oficios a los señores Gerentes de las citadas entidades Bancarias o de Ahorros, para que procedan a retener los dineros que a cualquier título posean y situarlos inmediatamente a órdenes de su despacho por conducto del Banco Agrario de esta ciudad de conformidad con el artículo 593 del C.G.P. (Ley 1564 de 2012) y/o conforme a las normas que en la actualidad regulen la materia.
(...)”

A fin de proveer sobre la solicitud de medida cautelar formulada por la parte ejecutante, para resolver el Despacho trae a colación lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 1551 de 2012 que señala:

Art. 45 **NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES.** La medida cautelar del embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.
(....)”

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que en aras de proteger el interés general sobre el particular el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 establece, que las medidas cautelares de embargo en procesos ejecutivos en los cuales sea demandado un municipio, sólo proceden cuando quede ejecutoriada la sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, lo anterior, comoquiera que en esta etapa procesal el título ejecutivo ya no se encuentra en discusión y el ente territorial tuvo la posibilidad de agotar todos los mecanismos de defensa necesarios; así mismo, las medidas cautelares están instituidas para evitar que la parte demandada se insolvente, lo cual resulta absolutamente imposible en el caso de los Municipios, toda vez que dichas entidades manejan recursos públicos que en la mayoría de los eventos tienen una destinación específica en beneficio de la población y adicionalmente, las obligaciones que se encuentren a cargo de ellos deben tener un rubro independiente y estar debidamente soportadas, y es por ello, que tanto la ley como la jurisprudencia realizan una diferenciación razonable entre el deudor particular y el deudor Municipio, ya que el embargo de los dineros públicos puede resultar perjudicial para la comunidad, lo cual es inadmisibles en un Estado Social de Derecho como el nuestro en el cual prima el interés general sobre el individual; acerca del asunto en cuestión manifestó la Corte lo siguiente:

“...es razonable que el embargo proceda luego de la ejecutoria de la sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución, pues antes de esta etapa procesal no hay certeza sobre la exigibilidad de la misma, ya que el municipio puede presentar, en ejercicio de su derecho de defensa, las excepciones que pretenda hacer valer en el proceso ejecutivo.

(...)

De otro lado, en relación con el segundo y tercer incisos demandados, encuentra la Sala Plena que su alcance no es el de restringir la posibilidad de embargar a los Municipios, tal como las razones de la acusación pretenden explicar, sino por el contrario estipula la mencionada posibilidad en condiciones específicas. En el caso del inciso segundo demandado se dispone que el decreto del embargo sobre el patrimonio de los Municipios en curso de los procesos ejecutivos en su contra, sólo es procedente en el momento en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, es decir, en el momento del mencionado proceso ejecutivo en que ya no se admite controversia por parte del ejecutado.

(...)

Por ello, tampoco la afirmación genérica del demandante según la cual se presenta un trato distinto al deudor Municipio respecto de su acreedor particular, está insuficientemente justificada. Lo anterior en razón a que, como se ha explicado ya varias veces, el deudor Municipio no puede insolventarse, mientras que el particular deudor sí. Por lo cual, el demandante debió explicar, para configurar un cargo de inconstitucionalidad en este punto, por qué en dicho contexto no es razonable que sobre el particular deudor la medida cautelar se adopte el inicio del proceso ejecutivo, y no después de la sentencia de ejecución.

(...)

Sobre lo explicado podría pensarse que igualmente se trata de un trato desigual en la regulación del proceso ejecutivo, según si el deudor es el Municipio o un particular. Para la Sala no hay duda de que ello sea así, pero como lo ha detallado en múltiples ocasiones la jurisprudencia, no basta con detectar el trato normativo

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

diferente, sino que hay que explicar por qué los aspectos, grupos o individuos comparados son comparables, para indagar sobre la justificación de la desigualdad.

En el caso concreto está claro que no son comparables el Municipio deudor y el particular deudor. Pues, como se ha dicho a lo largo de la presente providencia, el primero no se puede insolvenciar. No es posible que una entidad territorial disponga de su presupuesto para despojarse de él, menos cuando los Municipios están obligados a crear rubros para el cumplimiento de sus obligaciones, y a su vez el procedimiento para adquirirlas (las obligaciones) supone la apropiación presupuestal previa para el efecto. Y, se insiste, las medidas que se adoptan en los procesos ejecutivos, tienen por fin evitar que los deudores se insolventen.”¹

Descendiendo a la solicitud en concreto realizada por la parte ejecutante, se observa que la misma busca de manera general decretar el embargo y retención de las sumas de dinero del municipio de Santo Tomas (Atlántico) que se encuentren depositadas en las cuentas corrientes y de ahorro de este y CDT's, en varias entidades bancarias. Por lo tanto, al ser la entidad ejecutada un municipio, y de conformidad con la norma citada en precedencia, esta Agencia Judicial negará la solicitud de medida cautelar interpuesta por la parte ejecutante, puesto que la providencia a que hace mención el citado artículo aún, no ha sido dictada en el presente trámite.

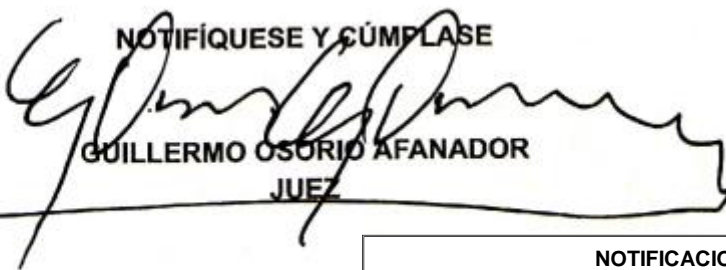
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla,

RESUELVE:

1°.- NEGAR la solicitud de medida cautelar formulada por la parte ejecutante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

2°.- Notificar el presente auto por estado electrónico, de la forma prevista en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

3°.- Una vez ejecutoriado el presente auto, pásese el expediente al Despacho para proveer lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 121 DE HOY 30/10/2020 A LAS 8:00 A.M.



ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA

¹ 2 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 2013. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.